

En relación a las normas supranacionales cuya aplicación se solicita expresamente se sostuvo puntualmente que los hechos investigados en estas actuaciones constituyen graves violaciones a los derechos humanos y revisten el carácter de delitos de lesa humanidad y que en función de ello se los considera imprescriptibles. Manifestaron los querellantes que el crimen de lesa humanidad, acorde a su contenido y naturaleza, es un crimen de derecho internacional, por lo cual las condiciones de su responsabilidad son establecidas por la normativa internacional, con independencia de lo que pueda establecerse en el derecho interno de los Estados; los cuales se encuentran en la obligación de juzgar y castigar a sus responsables.-

La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, en su artículo segundo señala que debe entenderse por genocidio cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. En esa misma línea ubican los querellantes a la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por cuanto su artículo primero establece que la desaparición forzada de personas es una violación grave a los derechos humanos. Se señala en concordancia con dicha postura la jurisprudencia de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos.-

Por otra parte, afirmaron los acusadores particulares que la protección de los derechos humanos fue comprometida internacionalmente por nuestro país desde la suscripción de la Carta de las Naciones Unidas -26 de junio de 1945-, la Carta de la Organización de los Estados Americanos -30 de abril de 1948-, la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos -10 de diciembre de 1948- y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre -2 de mayo de 1948-.

Así, la Argentina, desde la aplicación del derecho de gentes que prevé el artículo 118 (ex 102) de la C.N. y a través de su adhesión a